RESOLUCIÓN DEFENSORIAL No. 30-DPE-CGDZ9-S-002201-2015
EXPEDIENTE DEFENSORIAL No.-DPE-CGDZ9-S-1701-170102-7-2015-002201-ACHV
DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL ECUADOR.- COORDINACIÓN ZONAL 9.
Quito, D.M., 06 de abril de de 2015, las 9h30.

I.- ANTECEDENTES Y HECHOS

En fecha 16 de enero de 2015, la señora HOLANDA SUSANA BETANCOURT PERALTA, presentó a la Defensoría del Pueblo, una petición en la que manifiesta que por cuestiones laborales se trasladó a vivir en la ciudad de Guayaquil y no pudo ingresar a sus sobrinos a estudiar, sin embargo ha solicitado a la Dirección Distrital de Educación se canalice su ingreso en la provincia de Pichincha, cantón Mejía, ciudad Machachi a fin de que continúen con sus estudios conforme a las solicitudes que se anexa, situación que hasta la fecha no se ha logrado, por lo que responsabiliza de estos hechos a la Subsecretaria de Educación del Ministerio de Educación. Por este motivo, solicita que sus sobrinos por los problemas antes expuestos no se vulneren sus derechos a la educación. Adjunta a su petición cinco fojas en copias simples.

II.- DILIGENCIAS DEFENSORIALES REALIZADAS Y DOCUMENTACIÓN APORTADAS POR LAS PARTES

2.1.- A fojas 7 y 8 del expediente, mediante providencia No. DPE-CGDZ9-S-1701-170102-7-2015-002201-ACHV, del 21 de enero de 2015 se admite a trámite la petición presentada por la señora HOLANDA SUSANA BETANCOURT PERALTA, se pone en conocimiento de la institución presuntamente responsable el contenido de la petición y los derechos que podrían haberse vulnerado por los hechos relatados disponiendo al señor SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, conteste el contenido de la petición, la misma que fue notificada mediante Correos Nacionales del Ecuador con Guía No. 616874878, de fecha 22-01-2015.

2.2.- A fojas 9 del expediente se constata la providencia de seguimiento a la investigación defensorial No. 31-DPE-CGDZ9-S-2014-002201-A.CH.V., se dispone reformar la providencia No. 1701-170102-7-2014-002201 de 21 de enero de 2015, y dejar sin efecto el numeral 4 y se convoca a audiencia única a llevarse a cabo el 12 de febrero de 2015 a las 10h30 en la oficina sur de la Coordinación Zonal 9.

2.3.- A foja 11 del expediente se encuentra el Acta de no comparecencia a la Audiencia Pública fijada para el 12 de febrero de 2015, a las 10h30 en la cual comparece la señora HOLANDA SUSANA BETANCOURT PERALTA, en tanto el requerido no se presenta para realizar la presente diligencia.

2.4.- A fojas 12 del expediente se encuentra un Informe de Gestión Oficiosa de fecha 12 de febrero de 2015, en el cual la servidora Jimena Díaz acude al Ministerio de Educación ubicado en la Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa conjuntamente con la señora Susana Betancourt a fin de conocer la razón de la falta de comparecencia a la audiencia del señor Subsecretario de Educación o su delegado y contactar con él o los servidores responsables de dar una respuesta sobre la solicitud de la señora Susana Betancourt en relación a permitir el reingreso de sus tres sobrinos a las diferentes instituciones educativas asignadas en la matrícula automática a inicios del año lectivo 2014-2015. En dicha gestión oficiosa somos atendidas por el servidor Alberto Ottati quien luego de hacer varias diligencias nos informa que los niños se podrán reincorporar a las instituciones educativas a partir del lunes 23 de febrero del 2015 día en el cual se reinician las clases del segundo quimestre en el cicló sierra y que el trámite de legalización de las
matrículas se lo debe realizar con la Coordinación Zonal 2 del cantón Mejía y que estará a cargo de la Magister Luz Samaniego con quienes coordinaremos acciones. El informe de la gestión oficiosa realizada consta en fojas 12 y 13 del expediente.

2.5.- A foja 15 del expediente se encuentra un Email de fecha 26 de marzo del 2015 a través de correo electrónico, la Magister Luz Samaniego envía la documentación del Ministerio de Educación que confirma en el sistema que los niños Macias Betancourt Bryan Geovanny, la niña Macias Betancourt Hanny Gisell y el niño Macias Betancourt Robert Santiago tienen matrículas legalizadas para quintos de básica, primero de básica y octavo de básica respectivamente, acudiendo a clases con normalidad desde el día lunes 23 de febrero del 2015. tras lo cual la servidora Jimena Díaz, elabora una razón que consta en foja 14 en la que certifica haber recibido vía correo electrónico la información y adjuntarla al expediente a fin de dar por concluido el trámite, los documentos impresos constan en fojas 15, 16, 17, 18 y 19.

III.- ANÁLISIS DE DERECHOS

Los artículos 26, 27, 28, 44, 45 y 46 de la Constitución de la República establecen:

Art. 26 “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”.

Art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez: impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”.

Art. 28 “La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusivo”.

Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”.

Art. 45.- “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica: a su identidad, nombre y
ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”.

Art. 46.- “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos...”.

El artículo 28 de la Convención Internacional de los derechos del Niño dice:

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.

3. Los Estados Partes fomentarán y alentará la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo”.

El artículo 3 de la Convención Internacional de los derechos del Niño dice:

“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”.

El artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.

El artículo 24 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos manifiesta que: “Todo niño tiene
derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado".

El artículo 19 de la Convección Americana de Derechos Humanos dice: "Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren de su familia, de la sociedad y del Estado".

El artículo 215 de la Constitución de la República señala: "La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país..."

El artículo 2 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo señala en su literal b) que le corresponde a la Defensoría del Pueblo el defender y excitar de oficio o a petición de parte, cuando fuere procedente, la observancia de los derechos que la Constitución, las leyes, los convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador garanticen.

IV.- CONSIDERACIONES

De los hechos relatados en la petición de la señora Susana Holanda Betancourt Peralta, se determina que la Coordinación Zonal 2, Dirección Distrital 17D 11 Mejía - Rumíñahui, vulneró el derecho a la educación de los niños y la niña Macías Betancourt Bryan Geovanny, Macías Betancourt Hanny Gisell y Macías Betancourt Robert Santiago, al negarles el ingreso a las instituciones educativas asignadas automáticamente en el sistema al iniciar el año lectivo 2014 – 2015 luego de lo cual por motivos de trabajo de su padre tuvieron que migrar a la costa teniendo que retornar a la ciudad de Machachi cantón Mejía en el mes de enero del 2015, y los padres desean reincorporar a sus niños a las instituciones asignadas, las mismas que les niegan la entrada manifestando que los niños ya no constan como matriculados en el sistema, afianzándose esta resolución con la negativa por parte de la Dirección Distrital 17D; es así que la señora Susana Betancourt decide solicitar la intervención de la Defensoría del Pueblo de Ecuador con la finalidad de que el estado garantice el derecho a la educación lo cual consta en la Constitución de la República del Ecuador y otros instrumentos internacionales.

Se debe resaltar que dentro del expediente en informe de gestión oficiosa que consta en fechas 12 y 13, el servidor Alberto Ottati del Ministerio de Educación con fecha 12 de febrero del 2013 da una solución inmediata a la vulneración del derecho a la educación, coordinando con la Magister Luz Samaniego Directora Zona 2 a fin de que los niños se reintegren a clases con normalidad el lunes 23 de febrero del 2015 luego de las vacaciones de primer quimestre del ciclo sierra.

Con fecha 26 de marzo del 2015 la Magister Luz Samaniego Directora Zonal 2 envía a través de Zimbra dirigido a la servidora Jimena Díaz en archivos adjuntos las matrículas legalizadas en el sistema del Ministerio de Educación de los tres niños Macías Betancourt.

Con lo cual el Ministerio de Educación reconoció la vulneración de derechos a los hermanos Macías Betancourt y reparó el daño permitiendo el reingreso al sistema educativo de los tres niños y finalmente realizando la legalización de la matrícula.

Con todo lo expuesto, la Coordinación General Defensorial Zonal 9 - Sur, emite la presente:

V.- RESOLUCIÓN

1.- DECLARAR que este trámite se realizó de conformidad con los principios de procedimiento constantes en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo específicamente el el Título III, Capítulo I, Principios Generales, primordialmente el artículo 12 por ende se registrará como causa defensorial en el libro de causas 2015.

2.- ACEPTAR la petición presentada por la señora Susana Holanda Betancourt Peralta y declarar que pese a que los derechos a la educación se vulneraron, el Ministerio de Educación Coordinación Zonal 2 Dirección Distrital 17D11 Mejía - Rumíñahui reconoció la vulneración y procedió a su reparación.
3. RECOMENDAR al señor Subsecretario de Educación que disponga a los funcionarios a su cargo que en casos similares se les autorice la matrícula por considerar que la educación de los niños y adolescentes es obligatorio, de conformidad con el Art. 26 de la Constitución de la República.

3.- DEJAR a salvo los derechos que las partes se crean asistidos para ejercer las acciones legales en caso de considerarlo pertinente.

4.- Disponer el archivo del expediente defensorial No. DPE-CGDZ9-S-002201-2015 y hacerlo constar en el sistema informático que maneja la Institución, una vez que la presente resolución se ejecutore.

5.- Notificar esta resolución a las partes.

6.- Notifíquese y cúmplase.

[Signature]

Dr. Bismark Moreano Zámbano
COORDINADOR GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 9 – OFICINA SUR
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE ECUADOR
ACHV/2015

Notificaciones.

Señor
SUBSECRETARIO DE EDUCACION DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Av. Alazonas N34-451 y Av. Atahualpa
Quito, Distrito Metropolitano
Teléfono 396-1300 /1400/1500

Señora
HOLANDA SUSANA BETANCOURT PERALTA
Autopista Amaguaña entrada a Tambillo “Santa Elena casa E 214”
Quito, Distrito Metropolitano
Teléfono 2317-181